

## ¿NUEVO SEPARATISMO DE QUEBEC?

PEDRO CASTRO MARTÍNEZ

EL FUTURO DE QUEBEC como “sociedad distinta” o como país independiente es un asunto que no tardará en decidirse, seguramente antes de que termine 1992. El *impasse* en el que ha estado el estatuto constitucional de Quebec después del Acuerdo de Meech Lake reforzó las posturas opuestas a cualquier arreglo que suponga renunciar a sus derechos históricos. Sin duda se ha recorrido un largo camino sin retorno, en el que el mapa político —y geográfico— de Canadá puede alterarse notablemente.

Quebec sostiene muchas y viejas razones para considerarse, más que una provincia del espacio canadiense, una sociedad peculiar situada en un medio con frecuencia hostil. El aspecto más obvio de tal peculiaridad es el lenguaje de sus habitantes: Quebec es la única provincia con una población básicamente francófona. Hacia 1981, 82% de sus residentes hablaban francés en sus hogares. En New Brunswick, la segunda provincia con más hablantes de francés, sólo 31% hablaba ese idioma como primera lengua; en Ontario, 4% y en el resto de las provincias, 3% o menos.

En términos de sus instituciones políticas, Quebec se distingue notoriamente del resto de las provincias canadienses. Las leyes de Quebec se basan en el código civil más que en el derecho consuetudinario, y faltan símbolos importantes de la Corona tales como el discurso desde el trono, sustituido por el discurso inaugural. Por otra parte, ante la preocupación por mantener vivas las fuentes de la originalidad cultural, el gobierno provincial de Quebec ha asumido una importante responsabilidad en la selección y asentamiento de inmigrantes, y en el apoyo y regulación de las actividades culturales, tales como la publicación de libros y la distribución de películas.

La lealtad de los quebequenses a ideologías, partidos y gobiernos que defienden el carácter distintivo de su sociedad no tiene paralelo en América del Norte. Esta situación se debe a que mientras el gobierno federal responde ante un electorado predominantemente anglosajón, el gobierno de Quebec lo hace ante uno francófono. En otras palabras, se comparte la idea de que el único gobierno confiable para los quebe-

quebenses es el que emana de su propio suelo y circunstancia. Esta creencia se manifestó en los decenios de los años sesenta y setenta en activos movimientos políticos que demandaban la soberanía política para Quebec. Por lo demás, la convicción de que sus habitantes deben confiar sobre todo en su gobierno provincial es una constante en la política quebequense a lo largo de la historia de la confederación de Canadá. Ciertamente, los quebequenses han temido siempre al federalismo y prefieren en cambio las formas de asociación que incluyan un gobierno autónomo que promueva sus particulares intereses. Para los nacionalistas (o regionalistas, si se prefiere este término), el simple uso de la palabra “provincia” es detestable, un término inventado por los colonialistas ingleses para designar sus posesiones en la India. En tal situación, y sin importar que Ontario o Manitoba lleven en su nombre “provincia de . . .”, desde hace tiempo los francófonos de la *belle province* prefieren llamar Quebec a su región de origen.

Más allá de las diferencias señaladas, Quebec también es “distinta” por otras distancias que guarda con las demás provincias. Tal lejanía es evidente, por ejemplo, en las fuentes de entretenimiento y noticias de los ciudadanos de Canadá: los medios orientados a los francoparlantes están separados de los destinados al público anglófono. Hasta el sistema de radiofonía pública, responsable ante el parlamento canadiense y comprometido a promover la unidad nacional, ha estado dividido entre uno francófono, Radio-Canada (con sede en Montreal), y uno en inglés, la Canadian Broadcasting Corporation (CBC, con base en Toronto).

Estas circunstancias llevan a muchos quebequenses a pensar que su suelo natal no es sólo uno “con diferencias”, sino más bien que constituye una nación que merece ser reconocida como tal. Desde principios del siglo XIX el nacionalismo ha proporcionado una serie de supuestos mediante los cuales los intelectuales francófonos han definido su colectividad e interpretado su destino histórico. Con el paso de los años, la forma dominante de este nacionalismo ha cambiado radicalmente no sólo en cuanto a las fronteras geográficas de su nación, sino también de sus características y fines. Pero si el tema central de este nacionalismo ha sido la necesidad de mantener las distinciones culturales contra las amenazas británicas y del resto de Canadá, es permanente el deseo de romper las estructuras de dominio económico y político anglosajón.

#### LAS RAÍCES DEL PARTICULARISMO DE QUEBEC

La sociedad quebequense fue la primera comunidad europea radicada en lo que ahora es Canadá, a partir de su dependencia colonial de la

Nueva Francia. Su variante lingüística, el francés, que tanta importancia tuvo como elemento cohesionador, se formó a partir de la mezcla de dialectos que los pioneros llevaron a las nuevas tierras americanas. En su origen, las instituciones del régimen prerrevolucionario tuvieron una influencia decisiva. En especial, la Iglesia católica sería elemento de unión de los colonos franceses o *canadiens*, sobre todo después de que la Nueva Francia rompió los lazos con su metrópoli en 1759.

Quebec pertenecía al imperio francés pero era de poca importancia para la metrópoli, que nunca manifestó el mínimo interés en recuperar su posesión americana después de su derrota en los Llanos de Abraham; hecho curioso si se piensa en la lealtad que los quebequenses guardan a antiguos símbolos hasta ahora: la bandera de Quebec tiene una cruz blanca que simboliza la cristiandad y cuatro lirios heráldicos de los reyes de Francia.

La Nueva Francia se desplomó en 1759. En adelante, los *canadiens* tendrían que aprender a sobrevivir en su nueva condición de derrotados. Con la conquista, las estructuras administrativas y militares quedaron en manos de los británicos, así como el control del comercio que la Nueva Francia mantenía antes con Europa. Privados del apoyo de París, los *canadiens* buscarían su liderazgo en la Iglesia y, aunque menos, en los *seigneurs*, dos bastiones del extinto colonialismo francés. Tal situación sería el principio de la peculiaridad de los quebequenses: rompieron abruptamente los vínculos con los ancestros, se perdieron la Ilustración y las revoluciones liberales en Europa, se refugiaron en una cultura aislada y dejaron los negocios en manos de los anglosajones.

En el principio, los amos británicos buscaron la manera de acabar con el particularismo francófono, con la lengua y las instituciones que le daban sentido y coherencia. La Proclama Real de 1763 tenía justamente ese propósito, pero la fuerza de las circunstancias impidió que tuviera vigencia. En una decisión atinada, Londres terminó por aceptar que sus intereses en la colonia serían mejor servidos si tenía a los *canadiens* de su lado. Así, en virtud del Acta de Quebec de 1774, se restablecieron el sistema señorial y la ley civil francesa, a la Iglesia se le permitió volver a recolectar diezmos y a los católicos se les exceptuó del requisito de renunciar a su fe para ocupar puestos en la administración. Al mismo tiempo, se creó un gobierno conciliar en vez de una asamblea representativa a fin de mantener los privilegios del clero y los *seigneurs*.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Desmond Morton, *A Short History of Canada*, Edmonton, Hurting Publishers Ltd., 1983, p. 23.

El Acta de Quebec se ha interpretado de muchas maneras. Para muchos fue un reconocimiento a los derechos de los francocanadienses y parte fundamental de su posición especial, continuada en el marco constitucional británico y luego en el canadiense. Otros la han juzgado como un movimiento antidemocrático destinado a perpetuar el sistema feudal de la tierra y los derechos del clero. Pero todos coinciden en que tras la decisión de ponerla en vigor estuvieron los anticipados temores británicos de que los francocanadienses desafectos siguieran el "mal ejemplo" de las Trece Colonias vecinas, que proclamarían su independencia en 1776.

El Acta de Quebec sirvió también para formalizar una posición social y política de los francófonos que se mantuvo muchos años: ellos estaban autorizados a asumir funciones legales y eclesiásticas para servir a las necesidades de sus compatriotas, siempre y cuando no desafiaran el control de los anglófonos sobre la vida económica de la colonia. Una parte de la historia futura, incluyendo los fermentos nacionalistas de los años sesenta y setenta, se interpretaron como la lucha por romper ese molde, impuesto originalmente por el régimen colonial británico en colaboración con las élites francófonas tradicionales.

El primer movimiento nacionalista de los *canadiens* tuvo lugar a principios del siglo XIX. Fue encendido por la nueva clase de profesionales libres y pequeños mercaderes que formaron parte de la asamblea legislativa creada por el Acta Constitucional de 1791 (que también dividió a la colonia británica de Quebec en dos partes). En la nueva colonia del Bajo Canadá, los francocanadienses eran claramente mayoritarios, y mantenían la mayoría aun con una sobrerrepresentación anglófona. Esta posición les permitió resistir los planes británicos para desarrollar la economía colonial: los francófonos no se beneficiaron con el proyecto aun cuando se hicieron cargo de sus costos financieros mediante el pago de impuestos. De aquí se pasó al conflicto y a la emergencia del movimiento *Patriote*, que en 1837 tomó las armas para lograr la autonomía de Quebec, pero la superioridad militar de sus enemigos lo aplastó. En su derrota contó la vigorosa oposición del clero francocanadiense, alarmado por la ideología liberal de los rebeldes.

El fin de la rebelión de 1837 tuvo como resultado el fortalecimiento de los elementos más tradicionales de la sociedad francófona. La Iglesia en particular se benefició al recibir sacerdotes que huían del liberalismo de Francia y al multiplicar las órdenes religiosas y las instituciones educativas. Con la derrota de *Patriote* el clero promovió el catolicismo como médula de la incipiente nacionalidad francocanadiense. En adelante, la religión los distinguiría y separaría del resto de Norteamérica, a la que sentían como protestante y cada vez más secu-

lar. Hasta entonces, hablar su propio idioma en un país mayormente anglófono era de importancia secundaria. El lenguaje era útil como barrera a las ideas heréticas —“*la langue, gardienne de la foi*”— y los protegía de las influencias extranjeras. La grandeza nacional descansaría en la espiritualidad y en la piedad cristianas, virtudes florecientes en el medio rural y extrañas en el urbano. Por ello, los francocanadienses debían confiar más en las instituciones de la Iglesia que en los gobiernos y los políticos corroídos por las plagas del liberalismo y la corrupción. Ya entrado el siglo XX, el abad Lionel Groulx aprovechó la novela como medio para popularizar la vieja tesis histórica de la base clerical-agraria de la nacionalidad francocanadiense. Sus obras más conocidas, *Chez nos gens* (1920) y *L'Appel de la race* (1922), se vendieron con éxito, a pesar de su mediocre calidad literaria. La visión de que la historia del Canadá francés era una epopeya de mártires y patriotas cumpliendo la voluntad de Dios calaba hondo, pese a su ingenuidad, en el nacionalismo francófono.<sup>2</sup>

Otra consecuencia de la fallida revuelta fue el Acta de la Unión de 1840, en virtud de la cual el Bajo y el Alto Canadá se fundieron en una sola provincia, en el área San Lorenzo-Grandes Lagos, con el propósito de favorecer la asimilación de los levantiscos *canadiens*. Esta acta se inspiró en el histórico Informe Durham, cuyo autor calificó de “vano esfuerzo la preservación de una nacionalidad francocanadiense en medio de las colonias y estados angloamericanos”.<sup>3</sup>

El Canadá francés sobrevivió a esta amenaza de asimilación, puesto que los políticos francófonos del este formaron una fuerte alianza con los ingleses reformadores del oeste y, sobre esa base, se aseguró el reconocimiento de las peculiaridades francesas. En efecto, la dualidad se plasmaría en las instituciones del Canadá unido. El francés se convirtió en la lengua oficial junto con el inglés, los representantes de las dos colonias originales sostuvieron a los ministros y, en cierto grado, la votación se basó en el principio de mayoría. Con el tiempo, esta situación se volvió inaceptable para muchos anglófonos, por varias razones. En primer lugar, la población canadiense del oeste empezó a exceder a la de Canadá del este. En 1840, el occidente del país tenía más población que el oriente, pero a ambos se había asignado un número igual de asientos para impedir el dominio del primero. Ahora, los residentes del oeste se habían convertido a la divisa de “representación de acuerdo a la población”. En segundo lugar, la burguesía anglófona

<sup>2</sup> Kenneth McNaught, *The Penguin History of Canada*, Harmondsworth, Penguin Books, 1988, pp. 239 y 240.

<sup>3</sup> *Ibid.*, p. 94.

descubrió que los francocanadienses y sus aliados reformistas frustraban sus proyectos económicos en la asamblea de los Canadá. Empezó la campaña para unir a las diversas colonias anglosajonas con el propósito de poner a los francocanadienses en clara minoría y a las instituciones políticas centrales en manos de los anglófonos. Pero para que esta situación fuese aceptable, el federalismo y la autonomía de Canadá debían imponerse para ciertos propósitos. Esta circunstancia obró en favor de la llamada British North American Act (BNA) de 1867, que dio principio al Dominio de Canadá, el primer Estado semiautónomo dentro del Imperio Británico, organizado como confederación.

El criterio de "intereses distintivos", presente en las instituciones del Dominio, reflejó la ascendencia de la Iglesia dentro de la sociedad francófona. A Quebec se le otorgó jurisdicción sobre asuntos medulares para su supervivencia cultural, como la educación, así como en materia de salud, bienestar y solemnización de los matrimonios, pero se dejó que la Iglesia fuera su brazo ejecutor. Los términos de la Confederación, sin embargo, refrendarían la división cultural del trabajo que subyacía en el Acta de Quebec de 1774. Así por ejemplo, en los niveles superiores de la burocracia, los francófonos quedaron seriamente subrepresentados.

#### CAMBIOS ECONÓMICOS Y LA *RÉVOLUTION TRANQUILLE*

Hacia fines del siglo XIX se inició un importante proceso económico. En el decenio que inició en 1870, Montreal producía tantos productos de hierro y acero como Toronto y Hamilton juntos, y ya contaba con un número respetable de empresas manufactureras. De aquí se difundió el progreso industrial hacia otras partes de Quebec, lo que provocó, entre otras cosas, un ascenso en los niveles de urbanización entre los francófonos: en 1931 cerca de 58% de su población ya vivía en ciudades.<sup>4</sup> A estos cambios no correspondían, sin embargo, cambios políticos semejantes, por lo menos en el Canadá inglés. En otras palabras, Quebec conservaba rasgos provincianos mantenidos por formas antiguas de dominio. El precario sistema público de educación estaba bajo el Conseil de l'instruction publique, organismo donde el clero tenía la última palabra, y no existía el Ministerio de Educación. En el campo económico, el gobierno de Quebec tenía un papel pasivo. El desarrollo industrial se basaba en la explotación extensiva de los recursos natura-

<sup>4</sup> John McCallum, *Unequal Beginnings: Agriculture and Economic Development in Quebec and Ontario Until 1870*, Toronto, University of Toronto Press, 1980, p. 104.

les, a manos de empresas estadounidenses y canadienses de Ontario, que empleaban a un creciente proletariado francófono. En Quebec los empresarios y directivos eran casi todos anglófonos; los trabajadores no calificados eran principalmente francocanadienses que emigraban del campo.

El régimen liberal de Adélard Godbout (1939-1944) intentó llevar a cabo importantes reformas en los planos económico y político. El gobierno instituyó la educación obligatoria y concedió el voto a las mujeres, con la notoria oposición del clero. También formó Hydro-Quebec, nacionalizando Montreal Light, Heat & Power. Sin embargo, este proceso fue detenido abruptamente. El régimen sucesor de los liberales, el de la Union Nationale —de Maurice Duplessis—, detuvo la expansión del papel económico y social del gobierno de Quebec, pero no descuidó el campo de las relaciones laborales: mediante varias leyes y el aumento de la policía provincial, buscó reducir el poder de los sindicatos. Duplessis también mantuvo fielmente la división cultural del trabajo en la economía de Quebec e hizo poco por responder a la necesidad de la población francófona de mejor educación que la proporcionada por las instituciones clericales. Bajo la superficie del régimen ordenado de Duplessis tenían lugar fermentos sociales que prepararían la transición en pocos años. Durante la posguerra surgió en el Canadá francés una nueva clase media, integrada por profesionales con orientación reformista, que demandaban más intervención estatal, tanto para disminuir el control de la Iglesia en la educación y los servicios sociales, cuanto para ampliar las oportunidades de los francófonos dentro de una economía dominada por los angloparlantes. Este interés encontró cauces en movimientos y organizaciones. El Rassemblement pour l'indépendance nationale (RIN), el primer partido *indépendantiste* de Quebec, fue fundado en 1960. En 1961, académicos francófonos fundaron el Mouvement laïque de la langue française, que demandó de inmediato la secularización del sistema educativo quebequense.

Los movimientos sindicales de Quebec también estuvieron activos en el decenio que iniciara en 1950. Gracias a la prosperidad de la posguerra, su membresía se incrementó rápidamente. La Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC), fundada por la Iglesia en 1921, estuvo bajo un nuevo liderazgo, más comprometido con los intereses de los trabajadores, que empezó a distanciar al CTCC de sus anteriores patronos. Prueba de la nueva militancia de la CTCC fue una serie de huelgas, particularmente la de las minas de asbesto en 1949. Ésta no fue la primera, ni la más grande, ni la más violenta, pero tuvo gran importancia simbólica y en más de un sentido representó un punto de flexión en la historia de la provincia: los trabajadores francófonos actuaron con éxito contra los patronos anglófonos. La Fédération des

unions industrielles du Quebec (FUIQ), que agrupaba sindicatos de Quebec con el Canadian Labour Congress y el Congress of Industrial Organizations (CIO) de Estados Unidos, secundó a la CTCC. Ambas pidieron una práctica más equilibrada en el campo de las relaciones laborales y llamaron al gobierno de Quebec para que respondiera a las necesidades de los trabajadores en forma directa mediante iniciativas tales como el seguro público de salud, mejoras en la seguridad social, más intervención estatal en la educación, mejoramiento de las condiciones de trabajo y la propiedad pública de la producción acuífera en la provincia. También la limitada clase empresarial francófona se pronunció contra la marginación de que era objeto por parte del capital estadounidense y canadiense anglófono. A fines de los años cincuenta, la Chambre de commerce du Quebec pidió al gobierno crear un consejo económico empresarial, con buena representación de los hombres de negocios. En particular, se esperaba que el gobierno de Quebec pudiese ayudar a las firmas francocanadienses a encontrar fuentes baratas de financiamiento.

El fallecimiento de Duplessis en 1959 y la subsecuente desintegración de la Union Nationale abrió paso a los liberales de Jean Lesage en 1960. La elección de Lesage fue el principio de un gobierno activo comprometido con el cambio y de una fiebre reformista que tocaría a la sociedad en su conjunto. Se criticaron a fondo las instituciones y costumbres existentes, y se identificó el cambio con el progreso. Junto con el rechazo al pasado hubo un cambio radical ante la fe católica y el liderazgo de la Iglesia. El Canadá francés, que una vez se había considerado esencialmente católico, se convertía sin remedio en una sociedad secular.

A partir de 1960 las demandas por la expansión de los poderes del gobierno de Quebec encontraron el camino franco. El gobierno liberal emprendió reformas del Estado quebequense y de la política de Quebec en general. En los años siguientes, Quebec pasó por lo que se ha llamado la *Révolution Tranquille*, un periodo de cambios sin precedentes en lo intelectual y político. Durante este proceso se cuestionaron las creencias tradicionales acerca de las relaciones entre el Canadá francófono y el inglés, así como el lugar de Quebec dentro de la Confederación.

La *Révolution Tranquille* representó, ante todo, una transformación de las ideas. Quebec ahora se vio a sí misma como lo que era, una sociedad industrial y urbana. En dos décadas, de 1941 a 1961, la población rural bajó de un millón a medio millón y se duplicó la población urbana. Hacia 1960, Montreal tenía una población de dos millones.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> J.L. Granatstein et al., *Twentieth Century Canada*, Toronto, McGraw-Hill Ryerson Ltd., 1986, p. 415.



Los cambios en este sentido fueron más que numéricos, puesto que en esos años la gente no solamente emigró a las ciudades, sino que la radio y la televisión se encargaron de erosionar los pintorescos valores rurales. También el Estado tendría que asumir las funciones educativas y sociales, que hasta entonces estaban en manos de la Iglesia, así como planear la dirección de la economía quebequense y llevar a cabo las medidas para modernizarla y hacerla más competitiva.

La grandeza de Quebec no iba a descansar más en el pasado y en la glorificación de sus raíces católicas, sino en su futuro como sociedad industrial, urbana y secular. El gobierno de Quebec, responsable esencialmente ante un electorado francófono, era la única institución capaz de guiar a los *québécois* hacia el logro de sus objetivos históricos. En particular, era la palanca indispensable para deshacer la división cultural del trabajo en la economía de Quebec, y hacer a los quebequenses *maîtres chez nous*.

Más allá del cambio ideológico, sin embargo, en los años sesenta hubo un cambio real en las estructuras y el papel del Estado de Quebec. En 1963 se nacionalizaron las empresas hidroeléctricas privadas, de manera tal que Hydro-Quebec quedó como monopolio sobre la producción y la distribución de la electricidad en la provincia. El éxito de la empresa se convirtió rápidamente en una orgullosa leyenda de la *Révolution Tranquille*. Esta compañía provincial construyó instalaciones para producir alrededor de cinco millones de kilovatios en el río Mamicougan. Este proyecto acabó el mito de que el inglés era el único idioma posible en los proyectos grandes de ingeniería en América del Norte. En Hydro-Quebec la comunicación fue en francés y se encargaron de la construcción directivos e ingenieros francófonos. En 1968 se estableció la Sidérurgie Quebec (Sidbec), que produjo acero a partir de hierro de Labrador; también se convirtió en un símbolo porque la industria pesada se consideraba el sello distintivo de una nación industrial. La Société générale de financement (SGF) fue creada para inyectar capital en las empresas propiedad de francófonos. Con base en los fondos creados mediante el Plan de Pensiones de Quebec, la Caisse de dépôt et de placement du Quebec se convirtió en el mayor inversionista institucional y, cuando fue necesario, en comprador de valores gubernamentales.

En 1964 se creó el Ministerio de Educación, y en los años subsiguientes muchos de los *collèges classiques* se transformaron en instituciones seculares administradas por el gobierno, los Collèges d'enseignement général et professionnel (Cegeps). El control de los servicios sociales y de salud pasó de las instituciones religiosas a la burocracia quebequense.

El balance de las reformas de la *Révolution Tranquille* fue desigual. La secularización de la sociedad progresó rápidamente: la transferen-

cia de las funciones educativas y sociales de la Iglesia al Estado significó una caída definitiva de la influencia eclesiástica en la sociedad quebequense. Se logró mucho menos en lo que se refería a revertir el dominio anglosajón sobre la economía de Quebec, a pesar de la expansión de Hydro-Quebec. Lo más destacado fue la conversión de muchos quebequenses a la idea de que era necesario un Estado de Quebec dinámico e intervencionista. Pero para fines de los años sesenta, el gobierno de Quebec no parecía tener la capacidad de cumplir con su programa nacionalista de cambio económico y social. Sin embargo, el programa original se hacía más grande en la medida que aparecían nuevas preocupaciones. Los nacionalistas quebequenses empezaron a temer que la inmigración constante amenazara el predominio francófono en Montreal. Surgieron nuevas demandas para restringir el acceso a escuelas anglófonas. Al mismo tiempo, el fracaso relativo de Quebec para ofrecer nuevas oportunidades a los francófonos en los altos niveles de la economía quebequense alimentó las demandas por una intervención estatal para establecer el francés como lengua de comunicación en el trabajo.

#### EL PARTI QUÉBÉCOIS Y LA INDEPENDENCIA DE QUEBEC

Estas frustraciones mantuvieron más viva que nunca la causa de la independencia de Quebec. Para muchos jóvenes francófonos, la independencia era el mejor reconocimiento formal de su propia identidad. En consecuencia, el movimiento autonomista de Quebec dominó la política de esta región a lo largo del decenio de los años setenta y principios del de los ochenta. En 1968 el Parti Québécois (PQ), bajo el liderazgo de René Lévesque, surgió como el medio idóneo para promover la causa independentista. El PQ propuso repatriar los "centros de decisión económica" por medio de empresas estatales y la regulación de la propiedad no quebequense en el sector financiero. Quebec estaría ligado al resto de Canadá mediante una asociación económica vagamente definida, pero no alcanzó el *status* nacional a que su añeja particularidad cultural le daba derecho. Los miembros de la nueva clase media dominaron el liderazgo del PQ, pero éste surgió como amplia coalición de fuerzas sociales comprometidas con la soberanía de Quebec.<sup>6</sup>

Las presiones en favor de que se aceptara el carácter distintivo de

<sup>6</sup> Los enfoques para calificar y explicar la ideología y la base de clase del Parti Québécois se encuentran en Kenneth McRoberts, *Quebec: Social Change and Political Crisis*, Toronto, McClelland and Stewart, 1988, pp. 242-259.

Quebec crecieron con el regreso de los liberales al poder en 1970, bajo Robert Bourassa. En el mes de octubre, terroristas secuestraron a James Cross, comisionado británico de comercio, y a Pierre Laporte, ministro del Trabajo en el gobierno de Bourassa. La reputación de este líder se fue por los suelos cuando las autoridades federales, bajo el primer ministro Pierre Trudeau, invocaron la Ley de Medidas de Guerra y se hicieron cargo de la situación. En la llamada crisis de octubre de 1970 se criticó al gobierno de Quebec por su subordinación a Ottawa cuando el gobierno federal llevó adelante su respuesta de línea dura contra el Front de libération du Québec (FLQ).

Con el afán de avanzar su ideal federalista y de apaciguar los ánimos en Quebec, Trudeau convocó al año siguiente a los líderes de las provincias canadienses a una reunión en la Isla Victoria (Columbia Británica), donde propuso una constitución que protegería los derechos de la lengua francesa en las provincias orientales y concedería autoridad provincial más amplia en legislación social. La enmienda reconocería el derecho de veto a Quebec, Ontario y la mayoría de las provincias atlánticas y occidentales. Después de aceptar en principio la llamada Victoria Charter, Bourassa cayó en la cuenta de que en su provincia se objetaba con vehemencia un acuerdo que podría inhibir la extensión de la autonomía de Quebec en el futuro, y rehusó ratificar la propuesta. En consecuencia, el cambio constitucional quedó paralizado durante más de un decenio.

Los esfuerzos del gobierno de Quebec por medio de la Ley 22, para satisfacer las demandas nacionalistas en favor de la preeminencia del francés en la provincia, se fueron a pique. Fue general el rechazo a ese instrumento legal. Al mismo tiempo, al dejar de lado la intervención económica, el gobierno provincial pareció ignorar el valor político de la propiedad pública dentro de la economía de Quebec. Por otro lado, los dramáticos enfrentamientos entre el gobierno de Bourassa y el movimiento sindical, especialmente con los trabajadores del sector público, debilitaron todavía más la legitimidad del orden existente. En tanto que el Parti Québécois dominaba las fuerzas de oposición, su doctrina soberanista se manifestó como el remedio lógico a todos estos problemas. Así, el PQ ganó las elecciones en 1976.

La victoria de un partido comprometido con la soberanía de Quebec puso a la política canadiense en estado de máxima tensión. El PQ, sin embargo, no tenía prisa en detallar la naturaleza precisa de la soberanía que defendía, y se limitó a abogar por una forma vaga de asociación económica. Además, el partido declaró que un gobierno del PQ necesitaría primero obtener la aprobación popular en un referéndum antes de seguir adelante en cualquier movimiento hacia la separación.

Así, el gobierno de Lévesque se movió lenta y prudentemente en la cuestión de la soberanía. Tuvieron que pasar tres años antes de que el gobierno definiera cabalmente sus propuestas, y otro más antes de que pudiera llamar a un referéndum. Mientras tanto, el PQ se volcó en cuerpo y alma en la tarea de administrar el gobierno provincial.

El gobierno de Lévesque actuó primero en el campo de la lengua, con su Ley 101. En su versión final, ésta no difería radicalmente de la Ley 22. Pero hizo más estricto el acceso a las escuelas inglesas para los no anglófonos y también puso límites a la "franquización" de las operaciones de las empresas. Asimismo, al exigir que los anuncios comerciales en Quebec fuesen redactados en la lengua regional, se buscaba que la provincia tuviese un rostro netamente francés. Además, viniendo de un gobierno *indépendantiste*, las medidas tenían mayor credibilidad que la que tenía la Ley 22. Finalmente, el gobierno de Lévesque reformó las prácticas electorales y emprendió una variedad de medidas sociales, tales como el seguro público de automóviles, la reforma de las relaciones laborales, un proyecto de ingresos garantizados y medicina gratuita para los ancianos. Como puede observarse, el PQ se desempeñó como "buen" gobierno provincial.

El énfasis en el "buen gobierno" se racionalizó en términos de la estrategia gradualista del PQ: conforme la población adquiriera confianza en la habilidad del partido para proporcionar un buen gobierno provincial, se lograría más apoyo del pueblo a la opción independentista del partido. Ésta fue, sin embargo, un arma de doble filo. Sus tímidas medidas en favor de la distinción cultural sirvieron para aplacar a sectores descontentos de la población, y la Ley 101 dio la apariencia de que el orden federal se había reconstituido a satisfacción de los nacionalistas. A la postre, estas situaciones le costarían muy caras al PQ.

El liderazo del PQ propugnaba, en tanto, por una asociación económica amplia con el resto de Canadá y se comprometió a llevar adelante un referéndum histórico. Al atenuar la perspectiva del cambio, el gobierno reconocía tácitamente que la verdadera independencia tendría efectos catastróficos. Por tanto, no pudo convencer a buena parte de la población de que el objetivo real del PQ era la independencia. Al mismo tiempo, la credibilidad de su opción iba a depender de que el Canadá anglófono lo aceptara, pero no fue el caso. De cualquier modo, el gobierno del PQ fue incapaz de ampliar su base de apoyo más allá de su clientela electoral de francófonos jóvenes. Así, con sólo 40% a favor, "su" referéndum fue derrotado.

El costo de la derrota fue "compensado" por la promesa de Ottawa de renovar el federalismo. En la noche del 16 de mayo de 1980, cuatro días antes del referéndum, el primer ministro Pierre Trudeau

hizo el compromiso solemne, en su nombre y en el de los liberales, conservadores, el New Democratic Party (NDP) y de las otras nueve provincias, de dar nuevo aliento al federalismo. Su expresión más notable (que en opinión de sus críticos incluiría también la Carta de Derechos y Libertades —Bill of Rights—, la “patriación” y más impulso centralizador) fue el Acta Constitucional de 1982.

La pérdida del derecho de veto fue el mayor revés para Quebec en la coyuntura del cambio constitucional de 1982. Aunque este derecho no se encontraba en la British North American Act, había estado validado por la costumbre. La enmienda a la Constitución de 1982, sin embargo, requería la aprobación del gobierno federal y de siete provincias representando por lo menos 50% de la población de Canadá. En Victoria, en 1971, las propuestas constitucionales que rechazó Quebec contenían una fórmula de enmienda que requería el consentimiento del parlamento federal y de las legislaturas de la mayoría de las provincias (que debían incluir a Quebec y Ontario), dos de las cuatro provincias occidentales y dos de las cuatro provincias atlánticas que sumaban por lo menos 50% de la población canadiense. Así pues, en 1981 Quebec había logrado todavía menos que en 1971.

La nueva constitución también fracasó en reconocer la existencia de una nación quebequense, o aun reconocer la naturaleza distinta de Quebec como la única provincia con una mayoría francófona. Este rechazo se justificó en nombre de la igualdad de las provincias y la prioridad de los derechos individuales.<sup>7</sup> A ojos de los nacionalistas, todos ganaron con la operación constitucional salvo Quebec. El gobierno federal obtuvo su Carta de Derechos y Libertades, el oeste ganó poderes adicionales para manejar sus recursos naturales y su fórmula para enmendar la constitución; las provincias marítimas obtuvieron un firme compromiso federal con el principio de la igualdad de oportunidades entre las provincias, y Ontario logró evitar que se impusiera el bilingüismo en el parlamento y las cortes, algo que había existido en Quebec desde los primeros días de la Confederación.<sup>8</sup>

#### QUEBEC EN EL DECENIO DE LOS OCHENTA: ¿FIN DEL NACIONALISMO?

El fracaso del referéndum tendría un efecto devastador en el movimiento nacionalista. Aun cuando el PQ ganó las elecciones en 1981,

<sup>7</sup> Pierre Fournier, *A Meech Lake Post-Mortem: Is Quebec Sovereignty Inevitable?*, Montreal, McGill-Queen's University Press, p. 12.

<sup>8</sup> *Ibid.*, p. 13.

parecía que el “movimiento inexorable” hacia la independencia de Quebec se había detenido de manera permanente. El pesimismo no sólo se confirmó en la revisión constitucional de 1982, que fracasó en satisfacer las demandas de Quebec y fue aprobado a pesar de las objeciones de su gobierno; también hubo, en el decenio pasado, repudio generalizado en Quebec hacia la premisa central del movimiento independentista: la capacidad del Estado para llevar a cabo el mejoramiento social y económico. En parte, esto era mero reflejo de tendencias internacionales: el atractivo creciente de las doctrinas neoliberales y la crisis mundial a principios de los años ochenta. Pero los ataques se intensificaban por las condiciones específicas de Quebec: la enorme carga fiscal, resultado de los ambiciosos proyectos del Estado en los dos decenios anteriores, y el surgimiento de una dinámica clase empresarial. Hacia 1980, dos décadas de esfuerzos de Quebec para expandir la propiedad económica francófona dieron frutos. Un número sustancial de empresas se convirtió en actor importante en los mercados estadounidense e internacional: Banque National, Power Corporation y el Grupo Laurentian en finanzas; Lavalin y SNC en ingeniería; Bombardier en manufactura; Provigo en alimentos al menudeo, y Culinar en el procesamiento de alimentos. En la mayoría de los casos, estas firmas ya no dependían de la intervención estatal de Quebec. Por lo demás, los líderes empresariales francófonos se volvieron cada vez más críticos de todas las formas de intervención estatal. La segunda gestión de Lévesque claramente reflejó estas fuerzas. El gobierno no solamente procedió a desprenderse de algunas empresas estatales; también, para disminuir el crecimiento del gasto público, redujo los programas sociales y, en particular, se enredó en un amargo enfrentamiento con los sindicatos del sector público.

En suma, para mediados del decenio pasado la política de Quebec parecía haber cerrado un ciclo. El proyecto neonacionalista que había dominado en los años sesenta y setenta, celebrando y aun reforzando la peculiaridad de Quebec, parecía irremediamente gastado, así como el criterio de intervención estatal que lo acompañaba. Además, con la elección en 1985 de un renovado gobierno, con Bourassa al frente, parecía que Quebec se encaminaría hacia un proceso de “normalización” mediante el cual sería una provincia como las demás. Pero la experiencia de los años más recientes ha demostrado que una proporción sustancial de francófonos de Quebec todavía simpatiza con los papeles social y económico que el Estado quebequense asumió durante los años sesenta y setenta.

A partir del decenio de los años ochenta también quedó claro que los exitosos esfuerzos de los gobiernos de Quebec por fortalecer el papel

del francés fueron mucho más importantes para apaciguar a los nacionalistas descontentos que los programas federales. Sin embargo, muchos francófonos de Quebec comparten aún profundas inquietudes. En diciembre de 1988, la suprema corte de Canadá determinó que la provisión de la Ley 101, que exigía anuncios comerciales sólo en francés, estaba en conflicto con la Carta de Derechos y Libertades (así como con la propia Acta de Derechos Humanos de Quebec). El gobierno de Bourassa respondió con una medida compleja (Ley 178), que restringía los anuncios al francés, pero permitía el inglés en la publicidad dentro de las tiendas. Sobre la base de la decisión de la suprema corte, aun esta medida de compromiso violaba la Carta. Así, el gobierno de Bourassa se vio obligado a invocar la cláusula del “no obstante” (*notwithstanding clause*) a fin de proteger a la Ley 178 del desafío constitucional. Para muchos francófonos, cualquier desviación de la Ley 101 era inaceptable.<sup>9</sup> En efecto, no sólo la preeminencia del francés dentro de Quebec se convirtió en un *sine qua non* para la mayoría de los francófonos de Quebec, sino que la misma Ley 101 era sagrada. Cualquier amenaza a la integridad de la ley sería suficiente para despertar inquietudes acerca del futuro del Quebec francés.

Como dije antes, la revisión de la constitución canadiense de 1982 claramente no respondió a la demanda permanente de los francófonos de Quebec para reforzar el estatuto y los poderes de su gobierno. Éste acabó planteando sus términos para una futura reconciliación con el resto de Canadá: 1) su reconocimiento como sociedad distinta; 2) más participación en cuestiones migratorias; 3) limitaciones sobre el poder del gasto federal; 4) participación provincial en los nombramientos en la suprema corte; 5) el poder de veto sobre enmiendas constitucionales. Cada una de estas condiciones fue aprobada en la enmienda constitucional de 1987 —o Acuerdo de Meech Lake— por el gobierno de Mulroney y los ministros de las diez provincias, el 3 de junio de 1987. El parlamento federal y las legislaturas de ocho de las diez provincias aprobaron el acuerdo, pero debía ser ratificado por las diez provincias para que se convirtiera en parte de la constitución de Canadá. El plazo de tres años para ratificar el acuerdo marcó su fracaso. A lo largo de este periodo, la opinión pública cambió de la indiferencia a la hostilidad. Después de la aparatosa derrota de los liberales y del NDP en las elecciones federales de 1988 en Quebec, y con la acusación de traición

<sup>9</sup> McRoberts, “Quebec: Province, Nation or ‘Distinct Society?’”, en Michael Whittington y Glen Williams (comps.), *Canadian Politics in the 1990's*, Ontario, Scarborough, 1980, p. 105.

contra Quebec por haber apoyado el libre comercio, se rompió la unidad de los partidos federales a favor de Meech Lake. La circunstancia electoral también fue factor importante. Durante su convención, en diciembre de 1989, el NDP confirmó su cambio al ser elegido Audrey McLaughlin, un firme oponente de Meech Lake. Para los liberales, el apoyo al acuerdo terminó oficialmente el 23 de junio de 1990, con la elección de Chrétien para reemplazar a John Turner, un simpatizante de Meech Lake hasta el final. Este proceso de deterioro también incluyó tres elecciones provinciales y el rechazo del acuerdo por sendos nuevos gobiernos.

Más allá de los individuos, grupos y partidos que contribuyeron al fracaso de Meech Lake, éste puede explicarse básicamente porque en el Canadá anglófono surgió una visión del país que era incompatible con la que Quebec ha defendido durante varias décadas. Así por ejemplo, una encuesta que Angus Reid hizo a principios de abril de 1990, mostró que 59% de la población canadiense se oponía al acuerdo y que sólo 24% lo favorecía. Por regiones, estaban a favor 74% en Saskatchewan y Manitoba, 73% en British Columbia, 66% en Ontario, 65% en las provincias marítimas y 64% en Alberta.<sup>10</sup> Y en lo que se refiere al francés, aunque una buena parte de la élite canadiense continúa defendiendo el bilingüismo pancanadiense como la única solución aceptable al “problema” quebequense, el apoyo popular disminuye a lo largo del país, excepto en Quebec, desde luego. Ya pocos canadienses se identifican con lo que queda de la utopía lingüística de Trudeau.

Es importante no olvidar que la composición demográfica de Canadá es determinante en su acontecer político. Se quiera o no, el bilingüismo y la noción de dos pueblos fundadores no corresponden más a la realidad que percibe un gran número de canadienses. Canadá es un país multicultural, y en muchas regiones los francófonos ocupan un lugar más pequeño que otras minorías. A los ojos de muchos anglófonos, los francófonos en Quebec o en cualquier parte no son más que otro grupo étnico, de ninguna manera especial y ciertamente sin derecho a esperar un tratamiento distinto. Quebec, menospreciada en la constitución, se sintió doblemente rechazada. Habiendo dicho sí a Canadá en el referéndum de 1980, diez años después la humilló un Canadá que le dijo no. A eso se debe que dos comisiones después, Quebec esté ahora en vías de otro referéndum, que tendrá lugar, si todo sigue igual, antes del 26 de octubre de 1992.

A pesar de su fracaso, el Acuerdo de Meech Lake dejó un legado

<sup>10</sup> Citado por Fournier, *op. cit.*, p. 68.



positivo que podría ser de mucha importancia para solucionar los problemas nacionales de Canadá en el futuro. El espíritu del acuerdo trajo un periodo de cooperación gobierno federal-gobierno de Quebec como nunca antes y favoreció el entendimiento entre las provincias. No fue tan lejos como el PQ quiso, puesto que se negó a conceder la soberanía a Quebec, pero sí reconoció su "carácter distinto", cualquiera que sea el sentido interpretativo de las cortes.<sup>11</sup> Quizá lo más importante de Meech Lake fueron los puentes que tendió a un concepto renovado de la soberanía-asociación, claramente rechazado por los votantes en el referéndum de 1981, pero no del todo descartado ante la posibilidad del anunciado referéndum de 1992.

Por último, más allá de las tensiones continuas por el *status* del francés dentro de Quebec y el *impasse* aparente relacionado con el acomodo de Quebec dentro del orden constitucional canadiense, el nacionalismo quebequense podría también reforzarse con la reorientación de las relaciones económicas de Quebec. La creciente integración económica con Estados Unidos, con el acuerdo de libre comercio Canadá-Estados Unidos, bien puede servir para reducir la importancia relativa de los lazos económicos de Quebec con el resto de Canadá. Ya para 1984, 62% de las ventas quebequenses se dirigía a Estados Unidos; 38% quedaba para Canadá, especialmente para Ontario. Por el lado de las compras, 55% provenía de Estados Unidos y 45% de Canadá, sobre todo de Ontario. A pesar de su importancia, este dato no debe sobrestimarse en cuanto a la soberanía de Quebec, porque la intensa relación Norte-Sur a lo largo de la frontera entre Canadá y Estados Unidos arroja datos interesantes para las otras provincias canadienses. Así, en 1984, Ontario vendía 90% de sus productos en Estados Unidos, e importaba 88% de sus compras totales del mismo país.<sup>12</sup> En realidad, desde el punto de vista comercial y productivo, la economía canadiense aparece más como una zona dentro de la economía norteamericana que como una economía nacional. En esta perspectiva, la tarea de Quebec de escoger entre Estados Unidos y el resto de Canadá es un falso dilema. La situación económica estructural, que tiene ya muchos años de vigencia en las relaciones entre los vecinos y sus regiones, deja poco margen de acción al trío Estados Unidos-Quebec-resto de Canadá. Por

<sup>11</sup> Kimon Valaskakis, *Canada in the Nineties: Meltdown or Renaissance?*, Ottawa, The Gama International Press, Ltd., 1990, p. 122. Una opinión igualmente favorable se encuentra en Bothwell *et al.*, *Canada Since 1945: Power, Politics and Provincialism*, Toronto, University of Toronto Press, 1989, p. 396.

<sup>12</sup> Glen Williams, "Regions Within Regions: Canada in the Continent", *Canadian Politics in the 1990's*, *op. cit.*, 1990, p. 5.

tanto, es absurdo pensar que la soberanía quebequense haga descansar su viabilidad en una unión más estrecha con Estados Unidos ante un enfriamiento en sus relaciones con las demás provincias. Más aún, a causa de las necesidades políticas de Washington y de los compromisos del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá, es impensable que Estados Unidos “favorezca” a Quebec en detrimento de Ottawa.

#### DEL MERCADO CANADIENSE AL LIBRE COMERCIO

Dentro de la economía continental, y a pesar del progreso desde la *Révolution Tranquille*, Quebec se encuentra en una situación de doble dependencia. Su desarrollo económico, como el del resto de Canadá, ha ocurrido en gran parte a lo largo de las líneas de los intereses económicos estadounidenses, propiciando una estructura manufacturera relativamente débil, una gran dependencia de la exportación de materias primas, abultamiento del sector terciario y subdesarrollo de la investigación científica. Dentro de Canadá, por otra parte, el poder político de Ontario y el control que ejerce sobre el gobierno federal han permitido a esta provincia hacer de su desarrollo económico una prioridad, en detrimento no sólo de Quebec sino del resto de las provincias. Como intermediario entre las economías norteamericana y canadiense, Ontario ha podido obtener las mejores partes de la intergración económica continental. La manera como la economía de Quebec está integrada a la norteamericana es cualitativamente diferente de su integración en la economía canadiense, y esto es debido no sólo al tamaño o importancia relativa de los dos “socios” de Quebec, sino también a la forma de vinculación. Las compañías canadienses controlan principalmente aquellos sectores del mercado interno que producen bienes de consumo generalizado, así como sectores “intermedios” cuyo desarrollo está relacionado con el capital estadounidense. Estos sectores incluyen el comercio, la alimentación y la agricultura, las finanzas y otros servicios, transporte, hierro y acero, comunicaciones y textiles. Por su parte, el capital norteamericano está concentrado en sectores internacionalizados, integrados o basados en tecnologías avanzadas.

Después de la derrota en el referéndum, el PQ buscó aumentar sus relaciones económicas con Estados Unidos. Trató, por ejemplo, de distanciarse del gobierno federal repitiendo las críticas a la Foreign Investment Review Agency y a la Política Nacional Energética (siglas en inglés: NEP). En 1983 Bernardo Landry, entonces ministro de Comercio Exterior y de Asuntos Internacionales de Quebec, declaró que el libre comercio estaba de acuerdo con los objetivos de soberanía, y se

pronunció a favor de un mercado común Estados Unidos-Canadá-Quebec. Durante una visita a Estados Unidos dos años después, René Lévesque previó que la liberación del comercio entre Canadá y Estados Unidos sería el asunto más importante en los años siguientes.

En general, ahora se percibe que el acuerdo de libre comercio indudablemente acelerará la “descanadización” económica de Quebec. Al reforzar las relaciones Norte-Sur se reducirá todavía más la dependencia económica de Quebec respecto a Ontario, haciendo de esta manera más viable la soberanía de Quebec. Además, el apoyo de Quebec al libre comercio parte de la convicción de que las políticas federales nacionalistas favorecen la industria manufacturera de Ontario en detrimento de la estructura industrial de Quebec, que se basa en su mayor parte en la explotación de sus recursos naturales. Estas políticas hacen a Quebec un “anexo” de la industria de Ontario. No es sorprendente entonces que Ontario, que arriesga la mayor parte de su mercado cautivo canadiense a manos de Estados Unidos, se oponga al libre comercio. Los intereses de Ontario van más en dirección del mercado nacional que del libre mercado continental. Incluso el Toronto Dominion Bank no vacila en admitir, en un informe confidencial preparado en 1990, que “la economía de Quebec ha prosperado en años recientes gracias al espíritu de empresa y dirección de la clase directiva francófona” y que “Quebec probablemente obtendrá más ventajas del tratado de libre comercio Canadá-Estados Unidos que cualquier otra provincia”.<sup>13</sup>

Los cambios de los últimos diez años han hecho que la asociación económica con Canadá sea menos importante para Quebec, y es muy probable que las relaciones entre Quebec y las provincias sean similares a las de Quebec y Estados Unidos. Sin embargo, las relaciones económicas entre Quebec y Ontario son todavía muy importantes y cualquiera que sea el *status* político de Quebec en el futuro próximo, los mecanismos de la unión económica tendrán que ser mantenidos por lo menos durante un periodo de transición. Esto explica la prisa con que David Peterson y Robert Bourassa se reunieron después del fracaso de Meech Lake. Los dos ministros se reunieron en Montreal el 26 de junio de 1990 y otra vez en Toronto el 6 de julio del mismo año. En Toronto, Bourassa aseguró a los líderes empresariales de Ontario que Quebec deseaba continuar sus intercambios industriales y comerciales, mientras que Peterson declaró que las diferencias políticas no arruina-

<sup>13</sup> Maurice Gerard, “La Banque Toronto-Dominion ne craint pas l’après-Meech”, *La Presse*, 14 de marzo de 1990, citado por Fournier, *op. cit.*, p. 113.

rían el comercio por 30 000 millones de dólares anuales entre las dos provincias y las decenas de miles de trabajos que de allí se derivaban.

La mayor parte de los observadores que siguieron la campaña del referéndum de 1980 está de acuerdo en que los argumentos económicos, particularmente los relacionados con la inseguridad y el miedo experimentados por muchos *québécois*, desempeñaron un papel decisivo en el resultado final. La pregunta, difícil de responder, sería: ¿es la economía el talón de Aquiles de la soberanía quebequense? Vale la pena revisar la opinión de las grandes instituciones financieras. El Bank of Montreal y Merrill Lynch (de Estados Unidos) llevaron a cabo análisis para ver los efectos de la independencia de Quebec en el campo económico. Para Merrill Lynch la independencia de Quebec no debe tener consecuencias mayores en los mercados internacionales de dinero “y la diversificación de la economía de Quebec... compensará las sacudidas que una cierta forma de soberanía pudiera provocar en el corto plazo”.<sup>14</sup> De acuerdo con un informe del Bank of Montreal, Quebec tiene las herramientas legales, administrativas y económicas que necesita para enfrentar la posible independencia, y “el impulso económico de Quebec deberá continuar sin importar su futuro político”.

A pesar de tales análisis, las consecuencias de una separación de Quebec causan temor. Una encuesta del *Globe and Mail*-CBC llevada a cabo en junio de 1990, mostró que 62% de los *québécois* apoyaba la soberanía, pero 41% pensaba que su nivel de vida se deterioraría si Quebec se independizara.<sup>15</sup> Ésta es la razón fundamental por la que muchos separatistas prefieren hablar de “soberanía-asociación”. Por lo demás, conviene mencionar algunos elementos adicionales que pueden ser útiles para evaluar posibles consecuencias negativas de la separación de Quebec:

a) Los aborígenes también demandarían su propia secesión, o continuar sus vínculos con el resto de Canadá (RC).

b) El RC abandonaría su política nacional de bilingüismo, que afectaría a los 670 000 individuos de habla francesa que viven en las demás provincias.

c) Quebec tendría que asumir su parte de la deuda nacional. La Comisión Bélanger-Campeau argumentó que para marzo de 1991 tal participación debería ser de 18.5%, aunque considerando la población sería de 25% —casi 100 000 millones de dólares. Las pensiones representarían otra complicación.

<sup>14</sup> Fournier, *op. cit.*, p. 117.

<sup>15</sup> *Ibid.*, p. 118.

d) Ottawa solicitaría una compensación por sus activos federales, entre los que se incluyen 210 000 kilómetros cuadrados de territorio.

e) Quebec tendría que decidir sobre su moneda. La provincia tiene muchos intereses y pasivos denominados en dólares canadienses. ¿Alguien los manejaría en caso de que la moneda cambiara, de la noche a la mañana, por el *louis* quebequense?

f) La confianza se resquebrajaría, y más individuos de habla inglesa dejarían Quebec. Una encuesta realizada en abril sugirió que sólo 35% se quedaría si Quebec se independizara.

g) Quebec tendría que negociar un TLC no sólo con un Canadá reticente, sino también con Estados Unidos y México; con 6.8 millones de habitantes (en un país de 26.8 millones), Quebec tendría una influencia todavía menor de la que actualmente tiene en ese tipo de negociaciones. Por lo demás, Quebec tendría que renunciar a prácticas internacionales que serían consideradas competencia desleal. Por ejemplo, el TLC Estados Unidos-Canadá prohíbe a los gobiernos nacionales, pero permite a los provinciales, conceder subsidios. Quebec lo hace en gran escala. Hydro-Quebec tiene contratos con 13 transnacionales para proveerlas de energía a tasas muy por abajo de los costos productivos.

h) Más seria es la cuestión de si un Quebec soberano se encontraría libre o solamente excluido. En caso de votar a favor de dejar Canadá, los quebequenses pueden encontrarse en el caso de los países europeos que rechazaron ser miembros de la Comunidad Europea en el decenio de los setenta y optaron por quedarse dentro de la Asociación Europea de Libre Comercio. Pronto descubrieron que las decisiones tomadas en Bruselas les afectaban en todo sentido.

i) Las fronteras de Quebec no son las mismas que las del antiguo Bajo Canadá; lejos de ello. Toda la zona norte de Quebec, Ungava, fue incorporada a la provincia en 1912. Ungava fue, y presumiblemente sigue siendo, la tierra de los indios crees, cuya protección fue una responsabilidad federal que fue delegada como una conveniencia administrativa, pero no de manera irrevocable, a Quebec. Si Quebec pudiera algún día declararse independiente, quizá pierda más de la mitad de su territorio al día siguiente, si los crees también declaran su independencia y se llevan gran parte del poderoso proyecto de bahía James.

Estos datos contrastan con la difundida creencia de que Quebec tiene enormes riquezas en materias primas y energía que le permitirían abrirse su propio camino en el mundo. Quebec es la provincia más grande de Canadá; se extiende al norte más allá del Círculo Ártico; su territorio es 2.5 veces el tamaño de Texas y tiene una población de 6.8 millones. Mientras la industria aún se basa esencialmente en vastos re-

cursos forestales y minerales, muchas nuevas compañías (electrónica, telecomunicaciones, procesamiento de datos, aeroespacio, farmacéuticas, biotecnológicas y servicios financieros) han surgido en la última década. Quebec también cuenta con más de 300 firmas de servicios de computación y es líder en programas de computación educativos. Más de 70% de toda la investigación aeroespacial industrial en Quebec es dirigida por quebequenses.

La revolución económica ha proporcionado a la provincia una perspectiva nacional e internacional. No obstante, junto al dominio económico creciente de Quebec ha aumentado la precaución dentro de la comunidad económica acerca de los experimentos políticos. Ahora, después de un año del traumático fracaso de Meech Lake, muchos señalan que la independencia podría minar los éxitos económicos recientes. Las encuestas, por lo demás, sugieren que los quebequenses tienen sus dudas. Muestran, sobre todo, que la gente es ambivalente: desea “un Quebec independiente dentro de un Canadá sólido”.<sup>16</sup>

Los nacionalistas quebequenses ven la ola de movimientos independentistas en diferentes partes del planeta como un aliento para sus propios sueños. El líder separatista de Quebec, Jacques Parizeau, elogió la independencia del Báltico como señal de que los estados pequeños pueden seguir su propio camino y ser reconocidos por los líderes mundiales, incluso en esta era de grandes federaciones políticas (los tres estados bálticos tienen una población de alrededor de ocho millones de personas, equiparable a los casi siete millones de Quebec). Durante una reunión del PQ, principal oposición política al gobierno provincial de Quebec, Parizeau afirmó que si la soberanía funciona en el Báltico, “tengo la impresión de que no será menos difícil en Quebec”. Al señalar que su partido a menudo ha sido acusado de ir contra la corriente, comentó que a la luz de la historia actual los nacionalistas de Quebec son de hecho “precursores y profetas en la vanguardia de una tendencia mundial”.<sup>17</sup> Tiene razón, aunque sea en parte, el optimista Parizeau.

<sup>16</sup> John Grimond, “Es impráctica la secesión de Quebec”, *Excelsior*, 16 de julio de 1991, Sección F.

<sup>17</sup> Clyde H. Farnsworth, “Así como en el Báltico, Quebec puede seguir su propio camino: Parizeau”, *Excelsior*, 11 de septiembre de 1991, Sección A.